

## COLOMBIA

Henry Mance desde Bogotá

# Más allá del apretón de manos

## Dudas sobre solidez de acuerdo que puso fin a crisis regional.

La crisis diplomática que amenazó la estabilidad política y económica de los países andinos se resolvió el 7 de marzo con una reconciliación teatral de los presidentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en la cumbre presidencial del Grupo de Río realizada en República Dominicana. Sin embargo, no queda claro si el acuerdo llevará a progresos políticos en la región.

Las desavenencias estallaron luego de una ofensiva militar colombiana contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano la noche del 1 de marzo, en la que murió un dirigente clave — alias “Raúl Reyes” — del grupo guerrillero. La violación de la soberanía llevó al presidente ecuatoriano Rafael Correa, y a los mandatarios Hugo Chávez, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua, a romper relaciones diplomáticas con Colombia. Los dos países andinos movilizaron tropas a sus fronteras con Colombia.

Colombia presentó documentos alegando que el gobierno ecuatoriano había tolerado la presencia de las FARC en su territorio, que el grupo financió la campaña electoral de Correa en el 2006 y que Chávez había apoyado económicamente a la guerrilla.

“El hecho de que se haya llegado a unos acuerdos es muy importante”, afirmó Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Pero, añadió, “el problema de las fronteras no es sólo de conflicto armado, sino de desatención. Los Estados deben hacer presente la soberanía atendiendo a los pueblos. Y no tienen que esperar la violación del derecho internacional”.

Al menos 10 grupos indígenas viven en las regiones fronterizas de Colombia, en las que la violencia se ha incrementado en la última década a medida que las políticas de erradicación de drogas y las ofensivas militares han ido obligando a los grupos armados ilegales a alejarse del centro del país.

“Como pueblos indígenas, no tenemos fronteras. Somos pueblos con alta convicción de paz y vimos [la crisis diplomática] con mucha preocupación”, dijo Andrade.

El desenlace diplomático marcó un inesperado viraje. Al inicio de la cumbre, Correa había advertido: “Mis amigos dominicanos, si el presidente [colombiano Álvaro] Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea”.

Sin embargo, luego de varias horas de negociaciones, Correa, Chávez y Ortega se estrecharon las manos cordialmente con Uribe.

“Con el compromiso de no agredir nunca más a un país hermano y el pedido de perdón,

podemos dar por superado este gravísimo incidente”, dijo Correa.

### El papel de Chávez

Sin embargo, queda por ver si el acuerdo lleva a una reactivación del papel de Chávez en la liberación de los secuestrados por las FARC. Unas 700 personas permanecen en poder del grupo guerrillero (NA, Feb. 6, 2008). La intervención de Chávez ha permitido la liberación de seis secuestrados, luego que su rol de mediador oficial para un acuerdo más general fuera revocado por Uribe en noviembre pasado.

“El papel de Chávez es bondadoso, pero también es nocivo. Inquieta la actitud que ha tomado frente —y de un cierto apoyo— a las FARC”, manifestó Edwin Uribe, de Redepaz, organización con sede en Bogotá que defiende una salida pacífica al conflicto armado. “Sería interesante que jugara un papel siempre y cuando tenga las reglas de juego claras”.

Según Edwin Uribe, “la relación que tiene Chávez con las FARC no la tiene ningún otro país y podría volverlo indispensable. Hay otros países que vienen tomando fuerza, por ejemplo Francia, no sólo con Ingrid Betancourt sino con todos los secuestrados. Uribe preferiría cualquier otro Estado menos Chávez”.

### Simplificación del conflicto

Más allá de los secuestrados, la actitud de Chávez hacia las FARC —y la amenaza del presidente Uribe de demandarlo por genocidio, de la que luego dio marcha atrás— ha venido a sumarse a una discusión ya bastante simplificada sobre la violencia en la región.

En este contexto, planteamientos más sofisticados sobre las FARC han quedado eclipsados, como los estudios de José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, quien sostiene que el incremento de la



La crisis regional eclipsó una masiva manifestación el 6 de marzo a favor de las víctimas de la violencia.

<b>COLOMBIA</b>	1	<b>COLOMBIA</b>	7
Más allá del apretón de manos		Un país de desterrados	
<b>ECUADOR</b>	2	<b>EL CARIBE</b>	8
“Ecuador limita al norte con las FARC”		ALBA: ¿Más que tormenta en vaso de agua?	
<b>ARGENTINA</b>	3	<b>URUGUAY</b>	9
Red de represores sigue actuando		Contra prostitución infantil	
<b>AMÉRICA CENTRAL/ MÉXICO</b>	4	<b>NICARAGUA</b>	11
Plan Mérida recuerda Plan Colombia		Ortega pierde apoyo	
<b>GUATEMALA</b>	6	<b>PAÍSES ANDINOS</b>	12
¿Un nuevo país verdugo?		Diez meses más de preferencias arancelarias	

militarización en la sociedad colombiana no ha logrado reducir la falta de oportunidades económicas en que se basa el reclutamiento de la guerrilla.

“Los medios de comunicación evidencian cosas. Comenzando enero, los liberados era lo único que estaba pasando en Colombia. En febrero, el único problema eran las FARC. Lo que va saliendo llega a ser sólo la punta. Se ven muchos problemas de fondo —como es el reclutamiento, como es el narcotráfico— que se ven invisibilizados por lo que está pasando en el día a día”, explicó Edwin Uribe.

De hecho, la actual diplomacia de alto nivel eclipsó un intento clave para contrarrestar esta simplificación del conflicto: la masiva manifestación del 6 de marzo a favor de las víctimas. Las marchas fueron organizadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) para complementar la movilización contra las FARC del 4 de febrero, en la que se estima que dos millones de colombianos tomaron las calles.

Aunque la asistencia de decenas de miles de ciudadanos en Colombia y en más de 20 ciudades de todo el mundo

superó las expectativas, el impacto de la marcha se vio sin duda amenguado por la tensión regional. El apoyo de los medios a las manifestaciones fue también nimio; los diarios dieron prioridad a la crisis diplomática y no presentaron un examen detallado de las historias de las víctimas.

Algunos comentaristas han argumentado que la rápida resolución de la crisis diplomática fomentará nuevas discordias. En referencia a que no hubo condena hemisférica a Colombia durante la crisis, el analista colombiano Alfredo Molano señaló que “la agresión al Ecuador le salió a Uribe barata”.

Para el ex guerrillero León Valencia, el problema radica en el discurso anti-FARC del gobierno de Uribe: “Otro error grave ha sido no entender que los países de América Latina no compraron la agenda antiterrorista”.

En contraste, Edwin Uribe es más optimista: “Los amigos de la guerra dicen que no se necesita negociación. Pero hay otra parte del país que está cansada de la guerra, lo cual hace pensar que el país se está moviendo a favor de la paz de nuevo, como a finales de los 90”. □

## AMÉRICA LATINA

**La peor distribución de ingresos.** No obstante el crecimiento económico que ha experimentado durante la presente década, América Latina continúa teniendo la peor distribución de ingresos del mundo, según el Reporte Anual de Economía y Desarrollo 2007-2008 de la Corporación Andina de Fomento (CAF), publicado el 22 de febrero.

En la presentación del informe —titulado “Oportunidades en América Latina: Hacia una mejor política social”—, Miguel Castilla, economista jefe de la CAF, señaló que “si bien la pobreza se ha reducido en casi todos los países de la región y se cuenta, actualmente, con un mayor acceso a servicios básicos, como educación y salud, América Latina tiene la peor distribución de ingresos del mundo”.

Agregó que el informe plantea la necesidad de mejorar la eficiencia de la política social en el cumplimiento de sus objetivos.

“Para ello deben privilegiarse políticas públicas dirigidas a incrementar la dotación de capital humano y de esta manera romper el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza, así como generar empleos de calidad, garantizar un mayor acceso a los servicios básicos, facilitar la acumulación de activos físicos y procurar una mayor cobertura de pensiones en la vejez”. —NA.

## ECUADOR

Luis Ángel Saavedra desde Quito

# “Ecuador limita al norte con las FARC”

**Ante ausencia de autoridades colombianas, guerrilla controla 90% de frontera colombo-ecuatoriana.**

La masacre de un grupo de guerrilleros colombianos y tres estudiantes mexicanos en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, ejecutada por una operación aérea de las Fuerzas Armadas de Colombia, ha puesto en el debate varias aristas de una compleja realidad de la que no se ha deseado hablar, pese a conocerse desde hace muchos años en el Ecuador.

Desde el 2005 se han producido 17 incidentes en la frontera relacionados con incursiones del Ejército colombiano en territorio del Ecuador. Uno de los más graves ocurrió entre el 2 y 5 de noviembre del 2007, cuando helicópteros colombianos bombardearon posiciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población ecuatoriana de Yanamaru, en la oriental provincia de Sucumbíos.

En el pasado, las incursiones colombianas ya provocaron la muerte de al menos seis ecuatorianos en el río San Miguel —que separa Sucumbíos del departamento colombiano de Putumayo— y pese a que Colombia lo ha reconocido en las reuniones militares de la Comisión Binacional de Frontera, no se ha procedido a reparar los daños, ni a indemnizar a los familiares de las víctimas.

### Fumigaciones tóxicas

Además de las incursiones militares colombianas, la población ecuatoriana de frontera ha debido soportar las consecuencias de las fumigaciones tóxicas que el gobierno colombiano implementó desde 1999, con el afán de eliminar los cultivos de coca (NA, Feb. 9, 2006).

“Los aviones cruzaron la frontera y fumigaron en nuestro territorio, tuvimos que poner letreros sobre los árboles para que las avionetas vean que estaban sobre Ecuador”,

denunció Froilán Canticuz, dirigente de la comunidad indígena awá de Mataje, en la costa ecuatoriana, ante el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF), agrupación de la sociedad civil.

De acuerdo con el CIF, las fumigaciones han provocado daños en los cultivos y la salud de los habitantes de frontera, tanto en la provincia amazónica de Sucumbíos, como en la noroesteña provincia costera de Esmeraldas. La pérdida de cultivos ha provocado un lento éxodo de las comunidades fronterizas hacia las ciudades de Lago Agrio y Esmeraldas.

A esto se suma el arribo a Ecuador de miles de colombianos que huyen de la violencia en su país. Según el gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay alrededor de 250,000 colombianos en situación de refugio en el Ecuador. Las autoridades tienen en sus manos unas 50,000 solicitudes de refugio, de las cuales sólo han aceptado menos de 20,000.

Ante esto, desde el 2002 el CIF ha pedido la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estas comunidades. En la actualidad, tras la nueva agresión colombiana, el CIF exhortó al gobierno ecuatoriano a demandar a Colombia ante el Tribunal Internacional de La Haya por los daños provocados por las fumigaciones.

### FARC controlan territorio

Irónicamente, ni las fumigaciones ni la arremetida de sus Fuerzas Armadas han logrado que el Estado colombiano retome el control territorial de la frontera, de unos 700 km de largo; de ahí que el ministro de Defensa del Ecuador, Wellington Sandoval, afirmara que “Ecuador limita al norte con las FARC”.

## PARAGUAY

**Restos serían de desaparecidos.** Una comitiva judicial integrada por el fiscal Víctor Maldonado y el antropólogo Eduardo Cañete encontró el 10 de marzo en el sureño departamento de Paraguairí dos cuerpos que pertenecerían a desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89).

Se trataría de los restos de los campesinos Juan Dios Salinas y Albino Vera, quienes desaparecieron entre abril y junio de 1976, cuando formaban parte de las Ligas Agrarias, según informó la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), que investiga las violaciones a los derechos humanos del régimen de Stroessner así como las cometidas posteriormente por organismos del Estado hasta el 6 de octubre del 2003.

La CVJ —que se encuentra indagando 400 casos de desaparecidos— señaló que los trabajadores rurales desaparecieron en la época de mayor represión de los organismos de seguridad contra los movimientos campesinos. La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Asesinados del Paraguay (FADDAPY) calcula entre 3,000 y 4,000 el número de personas asesinadas durante la dictadura.

“Debemos hacer un trabajo minucioso para poder llegar a la plena identificación de las personas”, afirmó Cañete.

—PÚLSAR.

En efecto, salvo algunas excepciones, frente a cada población ecuatoriana de frontera se encuentra una base de las FARC o una población bajo control de las FARC.

Esta realidad ha generado una dinámica *sui generis* ya que, ante la ausencia del Estado colombiano, quienes necesitan realizar alguna actividad en territorio de frontera deben conversar con las FARC: los pequeños comerciantes ecuatorianos que cruzan la frontera deben contar con su permiso, las autoridades de los cantones y parroquias ecuatorianas deben hablar con la guerrilla para regular las actividades en sus límites; incluso las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona y desean hacer alguna reunión en territorio colombiano de frontera, deben contar con el aval de las FARC, según informes presentados por el Observatorio Internacional por la Paz (OIPAZ), el CIF y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organizaciones que trabajan permanentemente en frontera.

También es notorio el comercio con las FARC.

“Ellos llegan y compran productos a los campesinos; eso no significa que los campesinos sean de las FARC”, comenta Paco Chuji, presidente de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos (FONAKISE).

## ARGENTINA

Andrés Gaudin desde Buenos Aires

# Red de represores sigue actuando

## Desaparecen autores y testigos de violaciones a derechos humanos.

Asesinatos, suicidios inducidos, secuestros, cientos de amenazas de muerte, ocultación de testigos y pruebas, son parte del arsenal que los sectores militares de ultra derecha, vinculados a la última dictadura argentina (1976-83), están desplegando para obstruir los juicios por violación a los derechos humanos y la comparsa de declarantes que podrían sellar su suerte en los estrados judiciales.

A un año y medio de la desaparición de Jorge Julio López, testigo determinante en la condena a prisión perpetua del ex jefe policial Miguel Etchecolatz responsable de 20 campos de exterminio (*NA, Oct. 18, 2006*), el asesinato de un marino en una prisión de la Armada de Guerra, el sospechoso suicidio de un oficial en un hotel de la Fuerza Aérea y un aluvión de amenazas parecen mostrar que los violadores de los derechos humanos

Esta dinámica ha llevado al gobierno colombiano a esbozar la tesis de que las FARC reciben apoyo del Ecuador y que atacan desde Ecuador, tesis encaminada a involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano.

Desde 1998, la implementación militar del Plan Colombia ha forzado al Ecuador a movilizar tropas a la frontera.

“Nos cuesta US\$300 millones anuales el custodiar una frontera que Colombia no custodia; y no es suficiente, y nadie nos ayuda”, aseguró el presidente Rafael Correa.

Por otra parte, la presencia militar ecuatoriana ha transformado la vida cotidiana de las comunidades indígenas de la frontera, quienes además de estar acosadas por el conflicto, deben soportar el maltrato de militares ecuatorianos; ejemplo de ello es lo sucedido en Yanamaru, el pasado 5 de noviembre, cuando la comunidad, luego de sufrir la incursión colombiana, sufrió el robo de algunos enseres domésticos y víveres por parte del Ejército ecuatoriano, según la denuncia presentada en la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos.

“Las cosas no se solucionan con más militares”, dice Chuji, al comentar la escalada militar luego del bombardeo del 1 de marzo, pero la presencia militar ecuatoriana permanecerá por mucho tiempo más, mientras Colombia no resuelva su conflicto de forma negociada, o mientras las FARC continúen controlando la frontera. □

mantiene activa una poderosa estructura operativa.

“Lo que está ocurriendo es aterrador y hay que verlo en conjunto: en una prisión sacaban a pasear a un ex jefe policial, asesino, porque dicen que estaba deprimido; de López nunca se supo nada; la Armada envenenó a uno de los suyos, y ahora hay un ‘suicidio’ en un hotel militar. Al parecer, a esta gente no le hacen mella ni la democracia ni el discurso oficial”, dijo Claudio Pandolfi, abogado de las familias de dos víctimas de la represión policial.

Un aluvión de hechos registrados o conocidos en las últimas semanas es lo que preocupa a Pandolfi y a los organismos defensores de los derechos humanos, y ha puesto en estado de alerta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, titular de un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una cuestión de Estado.

## Mensaje macabro

El 10 de diciembre del 2007 apareció muerto en su celda de un presidio militar el ex prefecto de guardacostas Héctor Febres, sindicado como uno de los más sádicos represores de los años de dictadura y figura central en el tráfico de niños nacidos en cautiverio. Lo habían envenenado con una dosis de cianuro. Ese día —y para muchos analistas fue un mensaje más que una casualidad— Fernández de Kirchner asumía la presidencia.

En más de una ocasión Febres había dicho a sus familiares que se sentía abandonado por sus compañeros de armas, lo que les hizo temer a éstos que, a la hora de testi-

## GUATEMALA

**Primer juicio por desapariciones.** Luego de cinco años de retrasos, el 10 de marzo comenzó el juicio contra Felipe Cusanero Coj, ex colaborador del Ejército acusado de participar en la desaparición de seis campesinos mayas kaqchiquel entre 1982 y 1984 en la localidad de Choatalum, en el céntrico departamento de Chimaltenango.

Cusanero era “comisionado militar”, cargo desempeñado por civiles que permitía portar armas y mantener canales de comunicación con jefes militares a quienes debían informar sobre supuestos colaboradores de la guerrilla.

El proceso se inició en el 2003, cuando los familiares de las víctimas denunciaron a Cusanero ante el Ministerio Público. Sin embargo, a través de una serie de recursos la defensa logró dilatar el juicio hasta que la Corte de Constitucionalidad dio luz verde a la demanda en junio del año pasado.

El fiscal Albert Clinton anunció que solicitará una pena de entre 25 y 40 años de cárcel para Cusanero por la muerte de Lorenzo Villa, Alejo Culajay, Filomena López Chajchaquin, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mariano Augusto Tay Cajtí.

El abogado defensor de Cusanero, Mario Smith, manifestó en la audiencia que el juicio no procede debido a que el delito de desaparición existe recién desde 1996. Sin embargo, la Ley de Reconciliación Nacional —aprobada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a 36 años de guerra civil— establece que la extinción de la responsabilidad penal no se aplica para casos de genocidio, tortura y desaparición forzada. —NA.

moniar en la causa por la apropiación de bebés nacidos en cautiverio —debía hacerlo el 13 de diciembre, tres días después que apareciera muerto—, pudiera ventilar los nombres de otros oficiales implicados en ese y otros delitos.

“Por temor a la delación de muchos de sus pares, sus carceleros optaron por darle a Febres un tratamiento especial: no estaba alojado en una celda sino en un apartamento con cocina, teléfono celular, dos computadoras, televisor y videocasetera, y hay fotos que lo muestran veraneando, junto a su esposa, en una playa de la costa atlántica”, denunció la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Menos de tres meses después, el 25 de febrero, apareció muerto en un hotel de la Fuerza Aérea el teniente coronel del Ejército Paul Alberto Navone. Al igual que Febres, debía declarar ante un juez tres días después, también por una causa vinculada con el tráfico de bebés en un hospital militar del interior del país. La Justicia sigue investigando la causa de su muerte.

### Suicidio inducido

“Todo hace pensar que se trató de un suicidio inducido, porque el ex agente de inteligencia podía comprometer a varios represores. Navone sabía mucho sobre el destino de los niños nacidos en ese hospital y la suerte que corrieron sus madres”, dijo Marina Barbagelata, la abogada que representa a la familia de Raquel Negro, una secuestrada que, se sabe por testimonios de otros presos que lograron recuperar la libertad, dio a luz mellizos varones en 1978.

“Yo me atrevo a dudar de las muertes por suicidio, a las Abuelas nos preocupa mucho

que estas personas desaparezcan de este mundo sin poder hablar, y sugestivamente son muchos los militares que se están muriendo y que tienen una larga historia para contar, que saben sobre la suerte que corrieron nuestros hijos y nuestros nietos y pueden comprometer a quienes hoy son, justamente, sus supuestos carceleros”, dijo Carlotto.

La presidenta de las Abuelas se refería al ex prefecto Juan Antonio Azic, procesado por el secuestro de bebés, que intentó suicidarse con un disparo en la cabeza en julio del 2003 y se encuentra actualmente en un psiquiátrico; al coronel del Ejército Emilio Anadón, quien fue director del centro de exterminio La Perla, en la provincia de Córdoba, y fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en setiembre del 2004 mientras cumplía arresto domiciliario.

En el caso de López se supo, recién a mediados de enero, que cinco días después de su desaparición la Policía interrumpió un procedimiento motivado por la denuncia de Buseta, pese a que los perros sabuesos estaban indicando una casa rodante donde días después se encontró ropa ensangrentada que pertenecería a alguno de sus asesinos. No se elaboró ningún acta, por lo que se desconoce quién dio la sorpresiva orden de suspender el operativo de búsqueda.

“Desde el secuestro de López hasta hoy, debemos contabilizar entre 250 y 300 amenazas de muerte a testigos que deben declarar en causas por delitos cometidos por los genocidas militares, a lo que deben sumarse muertes, ‘suicidios’ y casos de testigos que desaparecen como por arte de magia, todo lo cual indica que los represores están organizados y actúan coordinadamente”, advirtió Guillermo Germano, abogado experto en derechos humanos. □

## AMÉRICA CENTRAL/ MÉXICO

Inforpress Centroamericana

# Plan Mérida recuerda Plan Colombia

## EEUU propone tratado de cooperación con México y América Central para combatir narcotráfico.

El Departamento de Estado de EEUU presentó el 29 de febrero su informe anual “Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos”, en el que afirma que la posición geográfica de América Central como punto intermedio entre Colombia y México, el acceso a costas en el Atlántico y el Pacífico así como fronteras porosas y poco vigiladas hacen que el istmo sea un punto de tránsito

ideal para el trasiego de droga desde América del Sur hacia México y EEUU.

Igualmente se constatan algunos avances como el aumento de decomisos en algunos países como Costa Rica y medidas para depurar las fuerzas policiales en Guatemala. Sin embargo, la corrupción generalizada continúa siendo un denominador común en toda la región y el principal obstáculo en la lucha contra el narcotráfico.

Durante la presentación del informe, el Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Ejecución de la Ley, David T. Johnson, recordó que la administración del presidente George W. Bush ha solicitado al Congreso un nuevo tratado de cooperación con México y América Central para combatir el narcotráfico, el llamado Plan Mérida.

El Plan Mérida implica un aumento significativo en los fondos otorgados a México y América Central para combatir el narcotráfico. Para el 2008, el gobierno de Bush solicitó al Congreso US\$500 millones en fondos suplementarios para México, a lo cual se añaden otros \$450 millones de fondos de cooperación solicitados para el 2009. Para el istmo, se requirieron US\$50 millones para este año y US\$100 millones para el 2009.

## “Las drogas se utilizan para minar algunos regímenes que no son del agrado de EEUU”.

— Ricardo Vargas

La iniciativa, que aún está pendiente de ser aprobada por el Congreso, ha despertado críticas, incluyendo comparaciones con el Plan Colombia, que permite la presencia de efectivos militares estadounidenses en territorio colombiano.

### Nuevos escenarios

Hoy, los carteles mexicanos son considerados como los más poderosos del mundo e incluso se afirma que han desbancado a las mafias colombianas.

Eduardo Pizarro León-Gómez, especialista mexicano en narcotráfico, en un análisis publicado en enero por la revista mexicana *Contralinea*, sostiene que “para desgracia de México, la mafia colombiana está perdiendo los segmentos más rentables del negocio ilegal”, ya que la mafia mexicana se está quedando con las mayores ganancias.

Según el analista, la cocaína proveniente de Colombia “se entrega por el Pacífico a las mafias centroamericanas y mexicana, que lo introducen al mercado norteamericano para su venta al menudeo o se entrega a las mafias brasileñas o rusas en la frontera con Venezuela o Brasil para el mercado europeo. Entonces, en Colombia se quedan con el 20% y las mafias mexicanas, guatemaltecas, rusas y brasileñas se quedan con el 80% de los ingresos”.

Pizarro León-Gómez considera que “en Colombia se están debilitando las mafias y las mexicanas se están fortaleciendo”.

A su criterio, el consumo de cocaína en EEUU ha disminuido, ya que se está transitando hacia una mayor demanda de drogas de laboratorio, mientras que el consumo de cocaína va en aumento en Europa, principalmente en lo que fue la Unión Soviética y en los países del antiguo bloque socialista. Esto, sostiene el analista, podría llevar a un debilitamiento progresivo de la vía Colombia-Guatemala-México y un fortalecimiento de la vía Colombia-Venezuela-Brasil-África-Europa para satisfacer los nuevos mercados.

Sin embargo, el analista colombiano Ricardo Vargas, director de la organización Acción Andina e investigador asociado del Transnational Institute, se mostró en desacuerdo con el planteamiento de Pizarro León-Gómez, y declaró que “si bien los mexi-

canos se han especializado en el tránsito a EEUU, esto no quiere decir que los colombianos hayan perdido. Hay una diversificación del trabajo”.

Vargas hace notar que “no es que esté aumentando en un país y disminuyendo en otro. En EEUU el consumo está estabilizado desde el 2000. En el caso de Europa hay un auge en España, Gran Bretaña y Suiza pero esto lo que hace es ampliar el mercado y no quiere decir que se deteriore el mercado estadounidense”.

### Instrumento político

Considera que además de inefectiva, la política antidrogas de EEUU ha sido utilizada como instrumento político y que el gobierno estadounidense tiende a señalar a sus enemigos políticos y “hacerse de la vista gorda” cuando se trata de regímenes aliados.

Este año el informe del Departamento de Estado hizo fuertes señalamientos contra Venezuela, país al que califica como “uno de los principales países de tránsito de la droga con altos niveles de corrupción y un débil sistema judicial”.

Las críticas contra Venezuela contrastan con las valoraciones positivas que se hacen de Guatemala, por ejemplo, donde las incautaciones de droga tampoco han sido significativas pero la administración del ex presidente Óscar Berger (2004-2008) fue considerada como favorable a los intereses de Washington.

Como señala Vargas, “EEUU usa las drogas como parte de su política de seguridad. Uno de los factores que enturbian la lucha antidrogas es la política, ya que las drogas se utilizan para minar algunos regímenes que no son del agrado de EEUU”.

El analista considera que el meollo del problema radica en la hegemonía estadounidense sobre la lucha contra el narcotráfico, ya que al adjudicarse un papel de “árbitro mundial” tiende a modificar las reglas del juego a su conveniencia.

“Si hubiera una instancia más democrática en términos de la participación de otros Estados en las políticas hemisféricas tal vez sería distinto. Esto ya no se puede ver en términos de países consumidores versus países exportadores”, manifestó. □

### PERÚ

**Militar condenado.** Por primera vez un tribunal de EEUU se pronunció sobre un caso de violación a los derechos humanos cometido en el Perú al sentenciar el 5 de marzo al mayor (r) del Ejército peruano Telmo Hurtado, responsable de una masacre de campesinos en 1985, a pagar una indemnización de US\$37 millones a dos sobrevivientes.

Tras permanecer 17 años bajo protección del

Ejército, Hurtado —conocido como “Carnicero de los Andes”— fugó a EEUU en el 2002 al ser requerido por la justicia peruana para responder sobre su participación en la matanza de 69 campesinos —incluyendo mujeres embarazadas y niños— en Accomarca, en el sureño departamento de Ayacucho, perpetrada durante la guerra interna que asoló el país entre 1980 y el 2000.

En abril del año pasado, al conocer que Hurtado ha-

bía sido detenido en Miami por las autoridades migratorias estadounidenses por permanecer ilegalmente en ese país, la defensa de Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido Baldeón, sobrevivientes de la masacre, presentó por medio de la organización de derechos humanos estadounidense Center for Justice and Accountability una demanda civil contra el militar.

Ochoa Lizarbe y Pulido Baldeón salvaron la vida al

esconderse de los soldados. Ambas tenían 12 años y perdieron a sus madres y hermanos.

Para organizaciones de derechos humanos se trata de un importante precedente y un mensaje a los responsables de violaciones a los derechos humanos que piensan que huyendo podrán evadir la justicia de sus propios países. El siguiente paso es la extradición de Hurtado al Perú para ser juzgado. —NA.

# ¿Un nuevo país verdugo?

**Ola de violencia impulsa a Congreso a revivir pena de muerte.**

Durante la madrugada del 29 de junio del 2000, Tomás Cerrate y Amílcar Cetino recibieron el castigo máximo, la pena de muerte, por haber asesinado en 1997 a Isabel Botrán mientras la tenían secuestrada. Esa mañana, los guatemaltecos despertaron quizá más tranquilos e imaginando que la violencia y la ola de raptos que azotaba a Guatemala en ese momento se había desvanecido.

Cerrate y Cetino sirvieron de protagonistas para provocar la catarsis en una población castigada por la criminalidad e inseguridad. Sin embargo, la solución fue más complicada que el problema.

El entonces presidente Alfonso Portillo (2000-2004) envió a toda su familia fuera del país por temor a represalias por parte de la banda de secuestradores a la que pertenecían los recién "ajusticiados". Unas semanas después renunció ante el Congreso a su facultad de seguir concediendo o no el indulto a los condenados a muerte.

En el 2002, la Corte de Constitucionalidad suspendió legalmente el cumplimiento de la pena de muerte luego que determinara

que la ley que la autorizaba no especificaba quién concedía el recurso de gracia. Las ejecuciones quedaron así en el olvido.

## Apoyo popular

Ahora, casi ocho años después, Guatemala se vuelve a enfrentar con este tema. El 12 de febrero el Congreso aprobó la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a la Pena de Muerte, que restituye al jefe de Estado la facultad de conceder o rechazar las peticiones de "gracia" presentadas por los condenados a la pena de muerte.

Si es beneficiado, el reo deberá purgar la pena máxima de prisión establecida en la legislación penal guatemalteca, que es de 50 años. La medida afecta directamente a 41 personas actualmente condenadas a la pena capital.

Nuevamente, el motivo para llegar a esta decisión —que muchos analistas consideran apresurada, sin base en conocimientos legales y compromisos internacionales— fue una ola de crímenes. En febrero, en poco más de dos semanas, fueron asesinados en Ciudad de Guatemala 11 conductores y ayudantes de buses o camionetas de transporte público por haberse negado a pagar extorsiones controladas desde los penales.

En una encuesta telefónica realizada por el diario local *Prensa Libre*, dos días después de la aprobación de la ley, el 97.4% de los guatemaltecos y guatemaltecas expresó su respaldo a la pena de muerte, y sólo el

2.6% se manifestó en contra.

Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Álvaro Colom —quien asumió el cargo el 8 de enero—, en cuyas manos estaba la decisión de vetar la ley, para que no reinstaure la pena de muerte y que en cambio busque soluciones "más eficaces y duraderas" para superar la crisis de seguridad pública que afecta a Guatemala.

Sebastián Elgueta, de AI, recordó que Guatemala votó en diciembre en las Naciones Unidas por la abolición de la pena de muerte, lo cual contradice la decisión que acaba de tomar el Congreso.

Asimismo, numerosos analistas políticos concuerdan en que la pena de muerte viola la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Guatemala, ya que en su artículo 4 establece que los países que tuvieron activa la pena de muerte y la suspendieron no pueden volver a utilizarla.

Frank La Rue, ex secretario de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, escribió en su columna de opinión en el diario *Prensa Libre* que restablecer el recurso de gracia es un paso necesario, pero sólo en función de establecer una nueva política de Estado de carácter más humanitario.

A su vez, Nineth Montenegro, legisladora del partido centrozquierdista Encuentro por Guatemala (EG) "el único partido político que votó en contra de la ley y que llevó como candidata presidencial en el 2007 a la Premio Nobel Rigoberta Menchú (*NA, Set. 19, 2007*)" pidió al gobierno, y a la ciudadanía, reflexionar sobre el tema.

"De nada sirve endurecer las penas o incentivar una cultura de muerte sin un sistema de justicia que camine bien, ni una Policía Nacional Civil o un Ministerio Público que trabaje efectivamente", dijo.

## Veto presidencial

Aunque Colom vetó la ley el 14 de marzo, señalando que contiene "inconstitucionalidades" y que "la pena de muerte no es disuasiva para [frenar] la violencia", todavía no está dicha la última palabra.

La decisión sorprendió a muchos porque Colom inicialmente había declarado que no iba a perdonar a ninguno de los condenados a muerte y que no pasará sobre la sentencia de los tribunales.

Los legisladores tienen ahora la opción de aceptar el veto y elaborar una nueva ley, o rechazarlo y mandar a publicar la norma en la gaceta oficial *Diario de Centroamérica* para que entre en vigencia de inmediato. Para esto último serán necesarios los votos de 105 de los 158 diputados.

El derechista Partido Patriota (PP), que promovió la aprobación de la ley, anunció que buscará en el Congreso los votos necesarios para rechazar el veto presidencial.

El vicepresidente Rafael Espada invocó a los legisladores a aceptar el veto y a no reactivar la ley.

"Combatir la violencia con violencia no es la cura para la evolución de una sociedad", dijo Espada a *Prensa Libre*. "La pérdida perpetua de la libertad, en un sistema penitenciarios efectivo, es la mejor condena". □



ROMMEL GONZALES

Guatemala es una sociedad marcada por la violencia.



Centro poblado formado en Soacha por desplazados de la violencia.

## COLOMBIA

Jenny Manrique desde Bogotá

# Un país de desterrados

## Desplazamiento afecta a más de 3 millones de colombianos.

En los barrios pobres de la periferia de Bogotá el país se está reasentando. Venidos de las tierras más ricas de Colombia, donde los cultivos de pancoger alimentan varias bocas y el calor mañanero entra por las granjas como un soplo de vida, miles de familias se han tenido que acomodar en casuchas improvisadas, construidas en terrenos inestables que ocupan un inmenso laberinto donde pega el frío de los cerros.

Sus múltiples acentos ya no sólo hablan de una guerra extendida por todos los rincones del país, sino de una tristeza colectiva producto de un crimen ya reconocido por la legis-

### Un flagelo que no cede

- **3 millones** de personas han emigrado internamente por causa de la violencia en los últimos 20 años, y **414,000** en el 2002, primer año del gobierno del presidente Álvaro Uribe, una cifra récord.
- **200,000** es el promedio anual de personas que abandonaron sus casas en los últimos 5 años.
- *Departamentos expulsores:* Antioquia, Valle, Tolima, Meta, Caquetá.
- *Ciudades receptoras:* Bogotá y Soacha, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Villavicencio.
- *Origen de la amenaza:* FARC **88%**, Ejército de Liberación Nacional (ELN) **28%**, paramilitares **17%**, ex paramilitares, narcotráfico y delincuencia común **84%** (la cifra supera el 100% porque en varios casos hay más de un autor de la amenaza).

Fuentes: ACNUR y Red de Solidaridad Social. Cifras a setiembre 2007.

lación internacional y nacional como de lesa humanidad: el desplazamiento forzado. Son cerca de 25,000 los desterrados que habitan en Altos de Cazucá, localidad perteneciente a Soacha, municipio al suroriente de la capital, convertido en el mayor receptor de esta población junto con la vecina Ciudad Bolívar.

Y es que este conflicto, además de muertos y secuestrados (NA, Feb. 6, 2008), también ha producido más de 3 millones de refugiados internos en las últimas dos décadas, con una media anual de cerca de 200,000 personas, según el programa gubernamental Red de Solidaridad Social, la mayoría de ellos escapando de amenazas o del fuego cruzado en zonas disputadas por más de un grupo armado, donde la palabra Estado parece un mal chiste (NA, Mayo 30, 2007).

### En medio de dos fuegos

Mara, como pidió que la llamaran, conoce como nadie qué significa eso de ser población civil en medio del conflicto. Esta mujer de 37 años es natural de un pueblo de unos 5,500 habitantes, cercano al municipio de Caucaasia, en el noroccidental departamento de Antioquia.

Su casa estaba enclavada en un lugar rodeado por el río de las rivalidades: bastaba cruzarlo a un lado para encontrarse con paramilitares, y dar unos cuantos remazos hacia el otro para toparse de frente con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Allí trabajaba su esposo conduciendo una chalupa (lancha artesanal) que servía de transporte público entre las veredas.

“De eso sobrevivíamos nosotros, se hacía como 700,000 pesos (US\$350) al mes trabajando 10 horas al día. No era suficiente porque uno de pobre nunca está completo, pero al menos la casa era propia”, acota Mara, quien entonces trabajaba como madre líder en el programa gubernamental Familias en Acción, encabezando a 144 mujeres beneficiarias de un subsidio para la educación de sus niños.

“En una ocasión un grupo de personas lo contrató para que los pasara al otro lado del río y al cruzar le salió otro poco de gente armada, y le dijeron que no se moviera hasta nueva orden. Parece ser que dicha gente había asesinado a unas personas; entonces los familiares la tomaron contra mi esposo porque él supuestamente tenía que saber que estaba transportado asesinos”, cuenta.

“Por eso la guerrilla llegó a mi pueblo buscándolo y le tocó huir al monte”, agrega. “Entonces cogieron a mi hijo, lo iban a matar porque lo levantaron a piedras pero él también se les escapó. Iban a tomar represalias contra nosotros y fue cuando se metieron a mi casa con piedras, palos y armas cortas y nos gritaban ‘malditos, malditos asesinos, salgan’”.

Tras esconderse varias horas, lograron salir por la noche hacia Caucaasia en un carro que les consiguió su cuñada. Llegaron donde la madre de Mara, quien vive en condiciones precarias y sólo les pudo ofrecer un suelo para dormir. A mediados del año pasado lograron viajar a Bogotá gracias a los pasa-

## BOLIVIA/PERÚ

### ONU contra hoja de coca.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas invocó a Bolivia y Perú a formular y ejecutar “programas de educación encaminados a eliminar la práctica de masticar hoja de coca y otros usos de la hoja de coca con fines que no sean terapéuticos”.

En su informe correspondiente al 2007 dado a conocer el 5 de marzo, la JIFE sostiene que “los únicos usos lícitos de la hoja de coca previstos en la Convención de 1961 son los médicos o científicos o la preparación de un agente saporífero del que se hayan extraído todos los alcaloides”.

Sin embargo, autoridades de ambos países señalan que la sugerencia contraviene la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 que establece que las medidas que se adopten para evitar el cultivo ilícito de la hoja de coca —destinado a elaborar cocaína— “deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”.

El presidente Evo Morales afirmó que “abolir lo que en Bolivia se conoce como ‘acullicu’ [masticado] es un atentado a los pueblos indígenas de la región andina”.

Por su parte, el canciller peruano José García Belaúnde manifestó que su país continuará respetando “el uso tradicional de la hoja de coca”, incluyendo el masticado, como medicina, en rituales y su industrialización con fines lícitos. —NA.

jes que les envió su hermana.

Finalmente conoció a una funcionaria de la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien le asistió con algunas mudas de ropa y la asesoró para acceder a la ayuda humanitaria de emergencia que entrega el gobierno —equivalente a \$100 mensuales por familia—, consistente en tres meses de arriendo y alimentación, la mayoría de veces mucho tiempo después del primer desarraigo.

Dolorosas historias como las de Mara se esconden en Altos de Cazucá, localidad de 30 barrios con disponibilidad de terrenos, la mayoría ilegales, sin escritura ni figuración en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito. La precariedad de la infraestructura hace que el costo de un arriendo oscile entre 50,000 y

100,000 pesos (\$25 y \$50) mensuales incluidos los servicios, un valor ínfimo respecto al resto de sectores de la ciudad.

A pesar de la ley 387 de 1997, que reconoce al desplazado como una persona sujeta de derechos especiales por su condición de víctima, la atención a esta población es casi dependiente de la cooperación internacional.

“La actitud de la gente es: pobrecito el desplazado, tome este pantalón y esa camisa vieja. Y nosotros somos personas que vivíamos mejor que cualquiera de los que hoy nos miran con lástima”, indica Rendón.

Por eso la lucha desde la MIGD es concienciar sobre esta problemática para que se desligue del asistencialismo y se fortalezca con la inversión social. □

## EL CARIBE

Inter Press Service/Noticias Aliadas

# ALBA: ¿Más que tormenta en vaso de agua?

## Programa de Chávez ingresa a región.

Cuando visitó Jamaica el año pasado, el presidente venezolano Hugo Chávez instó a los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a sumarse a su Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), vista como alternativa a la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas, apoyada por EEUU.

Chávez dijo que el ALBA representaría un bloque comercial “socialmente orientado” en vez de uno basado estrictamente en la lógica de la maximización sin control de las ganancias, y usaría mecanismos más eficaces para erradicar la pobreza dentro del hemisferio.

El líder enarboló la proverbial zanahoria, diciendo que bajo su nueva iniciativa habría significativos beneficios con la expansión de refinerías de petróleo, plantas de bauxita y aluminio e industrias petroquímicas. Habría también significativa asistencia médica. Bolivia, Cuba y Nicaragua ya se han sumado al acuerdo.

Uno de los aspectos claves del ALBA, que Chávez propuso por primera vez durante una cumbre de líderes de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en el 2001, es la iniciativa Petrocaribe, bajo la cual varios Estados miembros de CARICOM están comprando petróleo a precios por debajo del mercado (NA, Feb. 6, 2008).

Trinidad y Tobago había sido anteriormente el principal abastecedor de productos petrolíferos de las 15 naciones de CARICOM, e incluso había establecido un fondo de desarrollo regional por valor de varios millones de dólares.

### Posibles riesgos

El primer ministro trinitario Patrick Man-

ning dijo que su administración había aceptado dispensar las diversas regulaciones de CARICOM para permitir que los países aprovechen la oferta venezolana. Pero su gobierno “dejó bastante claro” que no hubiese tenido ningún problema con Petrocaribe si Caracas hubiera decidido usar la existente refinería Pointe-à-Pierre en Trinidad y Tobago para producir los productos para su venta en la región.

Manning ha advertido a sus pares caribeños que no acudan a su puerta si la iniciativa Petrocaribe no logra prosperar.

“Una vez que uno se vuelve el abastecedor dominante, como lo será Venezuela con Petrocaribe... también adquiere la responsabilidad de proporcionar seguridad energética a la región. Trinidad y Tobago no podrá hacer eso en circunstancias en que ya no somos el abastecedor dominante”, dijo Manning en una reciente conferencia de prensa.

“Ese es el riesgo que corren los países caribeños, y Trinidad y Tobago ha dejado bastante claro que ese va a ser el riesgo de ustedes”, dijo Manning.

San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda han firmado los principios del ALBA, pero tienen todavía que ratificar el pacto. Sin embargo, en enero, Dominica se convirtió en la primera, y hasta la fecha la única nación de CARICOM en hacerlo, y su primer ministro Roosevelt Skerrit desestimó las críticas diciendo que su gobierno seguiría una política exterior proactiva.

“Dominica sigue tan comprometida con CARICOM y la OECO [Organización de Estados del Caribe Oriental] como siempre lo estuvimos, y se asegurará que incluso mien-

# “No hay contradicción entre ser parte de ALBA y ser parte de CARICOM”.

— Ralph Gonsalves

tras buscamos realizar el tremendo potencial del ALBA nos mantengamos leales a nuestros socios de CARICOM”, dijo Skerrit en una transmisión por radio y televisión previa a la cumbre de CARICOM del 7 y 8 de marzo en las Bahamas.

Vaughan Lewis, ex director general de la OECO, a la que pertenecen Dominica, Antigua y San Vicente y las Granadinas, cree que Dominica y otros que dan su apoyo al ALBA la consideran sólo otro medio de obtener ayuda económica que no está disponible dentro de la agrupación de integración regional.

Lewis, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de las Indias Occidentales, dijo que en los últimos años Dominica, por ejemplo, ha tenido que seguir un rígido programa del Fondo Monetario Internacional que no había logrado promover adecuadamente el desarrollo en la isla.

## Preocupaciones en CARICOM

El ex secretario general de la AEC Norman Girvan restó importancia a argumentos dentro de la región de que el ingreso de Dominica al ALBA podría socavar CARICOM.

“Esta no es de ninguna manera la primera vez que un Estado miembro de CARICOM actúa de una manera que podría no estar en concordancia con sus compromisos y responsabilidades regionales. Allá a principios de los años 90, Jamaica y Trinidad y Tobago actuaron cada una unilateralmente al tratar

de calificar para el tratamiento ‘Paridad NAFTA’ [siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte] por parte de EEUU firmando ciertos tratados económicos bilaterales con ese país. No he oído que la gente esté hablando de eso”, dijo.

Girvan añadió que varios países rompieron filas también con sus contrapartes regionales en los años 90 al negociar separadamente con EEUU los tristemente célebres acuerdos de interdicción de drogas “Shipriider”, y luego más tarde en el 2002 con los controvertidos acuerdos para dar a personal estadounidense inmunidad judicial bajo la Corte Penal Internacional.

“Estos fueron casos clamorosos en que no se siguió una política de CARICOM unificada, y no escucho que la gente esté hablando de eso tampoco”.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que ha sido presidente de CARICOM [la presidencia es ahora de Bahamas], ha declinado ratificar el acuerdo ALBA, diciendo que no podría “hacer algo a menos que todas las cuestiones jurídicas estén en orden”.

Pero Gonsalves quiso recordar al Caribe que cuando Chávez llegó al poder, el comercio entre Washington y Caracas se valorizaba en US\$19 millardos, y “la semana pasada fue \$34 millardos”.

“No hay contradicción entre ser parte de ALBA y ser parte de CARICOM”, añadió. □

## URUGUAY

Pablo Long desde Montevideo

# Contra prostitución infantil

## Campaña se focaliza en trabajadores temporales y turistas.

La constatación de que la prostitución infantil “no conforma un fenómeno marginal sino que es parte del tejido social y de las prácticas sexuales de Uruguay”, según lo establece un estudio oficial, impulsó al gobierno del presidente Tabaré Vázquez a lanzar este verano una campaña de concientización dirigida a niños, adultos y algunos grupos poblacionales específicos, como los turistas y los trabajadores temporales de las áreas de frontera.

“La prostitución infantil es una práctica social, negada e invisibilizada pero siempre presente, y existe porque hay una gran demanda del mundo adulto, que se aprovecha de la existencia de niños y adolescentes que tienen grandes carencias afectivas y materiales —alimento, vivienda, ropa— y también requieren dinero y drogas”, dijo Susana Rostagnol, coordinadora del informe “Historias en el silencio. Prostitución infantil y adolescente”, presentado en diciembre pasado.

Rostagnol pertenece a la organización no gubernamental Red Uruguaya de Autonomías (RUDA), que realizó la investigación junto al estatal Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) y el Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia (UNICEF).

La campaña contra el abuso sexual infantil tiene, en principio, dos metas bien precisas: una a nivel de los adultos responsables, y otra a nivel de niños, niñas y adolescentes en cuanto a que, unos y otros, desarrollen conductas de extremo cuidado, especialmente en el uso masivo de la internet, explicó Luis Albernaz, investigador social y uno de los diseñadores de la campaña, a cargo del INAU.

“El problema de la prostitución infantil, del abuso sexual, de la pornografía, sumado al tema de tratas y tráfico de menores no es sólo de nuestro país, sino que alcanza a toda la región, de ahí que también nos hayamos propuesto motorizar el Proyecto 14 Ciudades Gemelas que estamos desarrollando dentro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) junto con Argentina, Brasil y Paraguay”, dijo Víctor Giorgi, presidente del INAU.

El INAU realiza diagnósticos rápidos de la situación y, a través de ellos, ha verificado que los empleos temporales, el movimiento de trabajadores y el turismo son determinantes en el aumento de la prostitución infantil y

# estadísticas en relieve

## AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE

**Índice de Equidad de Género.** Social Watch —red de organizaciones sociales comprometidas con la justicia social, económica y de género— dio a conocer el 28 de febrero, durante la 52ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer, su Índice de Equidad de Género 2008 (IEG).

Roberto Bissio, coordinador de Social Watch, reiteró que el IEG “muestra a las claras que el ingreso, por sí solo, no es garantía de equidad de género”. Países con un elevado ingreso per cápita, como EEUU y Gran Bretaña, tienen el mismo nivel de equidad de género que Colombia y Uruguay.

El IEG clasifica a 157 países —28 de América Latina y el Caribe— en una escala en la que 100 implicaría la igualdad absoluta entre mujeres y hombres en educación, participación económica y empoderamiento. —NA.

## AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE Índice de Equidad de Género

País	2007	2008
Colombia	75	75
Uruguay	68	75
Argentina	70	72
Panamá	69	71
Ecuador	72	71
Cuba	66	70
Brasil	73	69
Perú	65	69
Honduras	61	69
Venezuela	67	68
Costa Rica	66	68
Paraguay	61	67
El Salvador	69	67
Bolivia	66	66
Rep. Dominicana	65	66
Chile	62	62
Jamaica	61	61
México	61	60
Nicaragua	52	52
Guatemala	50	49

Fuente: Social Watch

adolescente.

“Hoy nuestra preocupación está centrada en los camioneros y en los puertos sobre el río Uruguay, en la frontera con Argentina, donde constatamos un aumento de esta causal de prostitución”, dijo Giorgi.

### Crece demanda

“El menor ingresa a la prostitución ante la demanda; no hay reclutamiento, salvo casos específicos. Pero detrás de la propia voluntad del menor —por decirlo de alguna manera— hay situaciones de vida muy difíciles, chicos que llegan a vender su cuerpo después de vivir distintas formas de violencia: cuadros de pobreza aguda, abuso sexual, ausencia de vínculos familiares positivos, falta de autoestima”, explicó Rostagnol.

“Tratándose de niños, niñas y adolescentes es frecuente que la demanda exista antes que la oferta. El perfil de quienes recurren a esta forma de prostitución también revela facetas sorprendentes: para empezar, nuestro estudio muestra que los clientes no son un pequeño grupo de perversos sino un abundante número de hombres adultos que resuelven parte de su sexualidad de esta manera”, dice el estudio de la RUDA.

Si bien la investigación sólo incluye a Montevideo y el área metropolitana, los datos obtenidos coinciden con denuncias provenientes del interior del país, en general zonas de frontera y, en ellas, los cuatro más importantes poblados limítrofes con Brasil, todos incluidos en el Proyecto 14 Ciudades Gemelas: Bella Unión, Rivera, Río Branco y Chuy.

“Aquí en Rivera ya superamos esa fase en la que los menores participaban de alguna orgía esporádicamente; ahora hay casas nocturnas especializadas y sus principales clientes son los turistas, aunque no es necesario ir a esas casas para encontrar menores prostituidos, basta con ir a la Plaza Internacional

—enclavada mitad en Brasil y mitad en Uruguay—, donde se ofrecen niñas de 12 y 13 años”, dijo la maestra Fernanda Cabrera.

La campaña de concientización del INAU será sostenida en el tiempo y abarcará todo el territorio uruguayo, aunque tendrá como objetivo algunas poblaciones específicas, como la turística y grupos de trabajadores que tienen baja estabilidad —camioneros o peones temporales—, “porque está bien detectado que ellos son clientes tradicionales de prostitución juvenil”, señaló Giorgi.

### Peligros por internet

Con el inicio del año lectivo en marzo, el organismo estatal puso el acento en las escuelas —alumnos, docentes y padres—, reclamando que se preste especial atención a la internet, que “si bien es un interesante auxiliar para el estudio, es un factor de primer nivel en la prostitución infantil y contiene mucho material inapropiado, especialmente pornografía, para el desarrollo personal, intelectual y emocional de los menores”.

A los niños que navegan por la internet se los instruye para que mantengan siempre el anonimato —tanto el propio como el de los maestros o el de las escuelas a las que asisten— cuando participan de encuentros virtuales, y se les hace una exhortación clave: “Conoce a tus amigos de internet de la misma forma que conoces a tus otros amigos. No les permitas cosas que no les permitirías a los amigos que tienes ahora”.

El estudio de la RUDA, que ha sido el gran disparador de esta campaña, recoge el relato dramático de niños y niñas víctimas de prostitución y violencia sexual. Verónica, una adolescente de 17 años y en situación de calle desde los 9, acaba de ser mamá y es la que ofrece el testimonio más desgarrador, cuando después de parir un varón le agradece por ello a su médico “porque, usted sabe, las mujeres hemos nacido para sufrir”. □

## notas breves

- Sólo 32% de los 570 millones de habitantes de **América Latina y el Caribe** tienen acceso a la universidad, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cifra lejana a la media de 55% en los países industrializados.

- El gobierno de España autorizó el 29 de febrero la extradición a **Argentina** del ex oficial naval Ricardo Cavallo, para ser juzgado por delitos de lesa humanidad. En el 2003 Cavallo fue deportado a España desde México, acusado de ejecuciones y torturas a activistas de izquierda durante la dictadura militar argentina (1976-83).

- Un tribunal en **Brasil** decidió a principios de marzo prohibir el monocultivo de euca-

lipto en el municipio de São Luiz de Paratinga, estado de São Paulo, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental de ese tipo de plantaciones usadas para la producción de celulosa.

- El presidente de **Guatemala**, Álvaro Colom, anunció el 25 de febrero que se abrirán al público los archivos militares que abarcan los 36 años de guerra civil que concluyó en 1996. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el conflicto dejó 200,000 muertos y 50,000 desaparecidos, 93% cometidos por fuerzas gubernamentales.

- Nueve trabajadores de la empresa minera Yanacocha, en el **Perú**, resultaron gravemente intoxicados el 27 de febrero por un derrame de petróleo mientras realizaban labores de limpieza en la cantera China Linda, en el norteño departamento de Cajamarca.

# Ortega pierde apoyo

**Nicaragüenses cada vez más impacientes con líder sandinista.**



Ricardo Antonio Amador es uno de los nicaragüenses que siguen apoyando a Ortega.

Los nicaragüenses parecen estar perdiendo la fe en el presidente sandinista Daniel Ortega, según la más reciente encuesta de opinión, publicada en febrero en el diario *La Prensa*, el principal del país.

Ortega retornó al poder en el 2006 prometiendo esperanza para los nicaragüenses pobres. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 80% de la población vive con menos de US\$2 diarios.

Su regreso al palacio presidencial se produjo después de más de 15 años de ausencia (*NA*, Nov. 15, 2006). Llegó al poder por primera vez en 1979 luego del triunfo de la revolución que derrocó la dictadura de la familia Somoza (1934-79), apoyada por EEUU. Ortega gobernó hasta 1990.

La reciente encuesta muestra que la popularidad de Ortega ha caído a 21%, desde el 61% en febrero del 2007, un mes después que asumiera la presidencia.

Una consigna de la campaña, que todavía adorna un gigantesco cartel en el centro de Managua, la capital, y dice "¡Arriba los pobres del mundo!", ahora parece fuera de lugar tras su dramática caída de popularidad.

Muchos nicaragüenses a quienes cautivó con promesas de educación y salud gratuitas, parecen desilusionados.

El taxista Dennis Rocha cree que Ortega está más preocupado con la retórica que con la sustancia.

"Nosotros no tenemos las calles, nosotros no tenemos los edificios, nosotros no tenemos los trabajos", dijo Rocha en referencia a las promesas electorales. "No hay progreso".

Saray, joven pobladora de la localidad rural norteña de Río Blanco, dice que es probable que los pobres se levanten contra Ortega.

"No ha cambiado nada. Los precios de la comida están subiendo. La gente se está yendo a Guatemala, El Salvador, Costa Rica o inclusive a EEUU si pueden", dijo la joven poco antes de subir a un bus para asumir un trabajo junto con un familiar en la vecina Costa Rica.

## Cooperación con EEUU

En tanto una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó a Nicaragua a fines de febrero en visita de dos semanas para una inspección de la economía, vinculada a un crédito de US\$100 millones. La preocupación del FMI por la falta de transparencia sobre la ayuda proporcionada por el presidente Hugo Chávez y Venezuela ha generado dudas sobre la finalidad del paquete crediticio de la entidad.

Aunque ha lanzado andanadas de insultos contra EEUU desde lugares como el estrado de las Naciones Unidas en Nueva York, y participado en marchas de solidaridad con Chávez, en el fondo Ortega ha cooperado con EEUU pese a sus muestras públicas de desafío.

Se dice que en un convenio bajo el Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (TLCAC+RD) con

EEUU mantuvo buenas relaciones con una empresa textil estadounidense que estaba construyendo una fábrica de varios millones de dólares en el país.

En febrero, un mes después que se desarrollara un intercambio de palabras con la agencia antidrogas de EEUU (DEA), se reunió con funcionarios antinarcóticos de ese país en un intento por encontrar nuevas formas de trabajo conjunto en la lucha contra las drogas.

Pero mientras se realizaba la reunión con el FMI, más de un millar de trabajadores marcharon frente al Banco Central protestando por la supuesta presión del FMI sobre el gobierno para resistir los incrementos salariales.

Mientras tanto, Nicaragua continúa azotada por la pobreza, y la esperanza casi se ha desvanecido para muchos.

Según indicadores económicos, Nicaragua continúa siendo el cuarto país más pobre de América Latina según el PNUD.

Y el panorama financiero es sombrío. El año pasado la inflación llegó a casi 17%, la más alta de América Central, y un 7% más que en el 2006, según cifras preliminares.

Igualmente, el crecimiento económico en el 2007 fue sólo 3.4%, por debajo del 4.2% del año anterior, aunque otros aseguran que Ortega heredó muchos de los problemas.

El economista Néstor Avendaño dijo a la prensa local que para que el país experimente una verdadera reducción de la pobreza, el crecimiento debe llegar a 8%-10%. Pero recientes predicciones para el 2008 colocan la cifra en alrededor de la mitad.

## Ayuda de Venezuela

Gran parte de las esperanzas de Ortega se basa en la ayuda y petróleo de Venezuela. Poco después de asumir la presidencia, Nicaragua se sumó a Venezuela y Cuba en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), bloque de países que busca contrarrestar la influencia de EEUU. Uno de sus planes considera la construcción en Nicaragua de una refinería de petróleo a un costo de \$4 millardos, financiada con dinero del país sudamericano.

En un incidente ocurrido en agosto del año pasado, Ortega se enfrentó con la petrolera estadounidense Esso, que posee la única refinería en Nicaragua. En medio de una crisis energética —los apagones fueron frecuentes el año pasado— y la incapacidad para acceder al petróleo prometido por Chávez, Ortega tomó control brevemente de la refinería bajo el pretexto de que Esso debía casi \$3 millones en impuestos, hasta conseguir petróleo venezolano.

A pesar de esos incidentes, Paul Trivelli, embajador de EEUU en Nicaragua, dijo que es claro que Ortega quiere cortejar a ambas partes. "Nuestra relación es una razonable 'relación de trabajo'", declaró a la prensa local el año pasado. "Por eso continúa caminando en esa línea".

Sin embargo, para Ricardo Antonio Amador, trabajador a medio tiempo en un bar, Ortega continúa siendo el salvador de los pobres. "Ortega va a cambiar las cosas para bien. Yo lo he visto parar su carro para darle ropa y comida a gente pobre. Lo he visto más de una vez". □

# Diez meses más de preferencias arancelarias

## EEUU aprueba extensión de ATPDEA hasta diciembre.

El presidente estadounidense George W. Bush firmó el 29 de febrero la ampliación hasta el 31 de diciembre de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) que otorga beneficios arancelarios a exportaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Unos 6,200 productos de los cuatro países andinos, incluyendo textiles, espárragos, flores y joyas, continuarán ingresando a EEUU libres de aranceles a cambio de programas de lucha contra las drogas.

Esta es la tercera renovación de la ATPDEA, que entró en vigencia en diciembre del 2001 por un periodo de cinco años, en reemplazo de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA por sus siglas en inglés), aprobada en 1991 por un plazo de 10 años. Al vencerse la ATPDEA el 31 de diciembre del 2006, fue renovada hasta el 30 junio del 2007, y luego hasta el 29 de febrero pasado. Supuestamente, el plazo de vencimiento ya no podrá ser ampliado nuevamente.

Para Bolivia, Colombia y Ecuador la iniciativa permitirá por unos meses más percibir los beneficios de las preferencias arancelarias. Al Perú le allanará el camino para la entrada en vigencia el 1 de enero del 2009 del tratado de libre comercio con EEUU que fue ratificado en diciembre por el Congreso estadounidense (NA, Dic. 12, 2007).

Según Tom Casey, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, "casi dos millones de personas en estos cuatro países se benefician de la ATPDEA".

## ¿Y después de la ATPDEA?

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado invocaron al Congreso estadounidense a ratificar el tratado de libre comercio con Colombia, firmado por ambos países en febrero del 2007 (NA, Set. 6, 2006) y que se encuentra estancado debido a que la mayoría demócrata exige al gobierno colombiano mejoras en la situación de los derechos humanos y detener la violencia contra dirigentes sindicales.

Sin embargo, ante la cercanía de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre, difícilmente este tema entrará en la agenda legislativa.

"Este es un año muy político, pues hay elecciones y eso no se puede olvidar", declaró el congresista demócrata Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios.

Bolivia y Ecuador, que no tienen planes de negociar tratados de libre comercio con EEUU, están solicitando acuerdos comerciales de más largo plazo.

"Bolivia quiere tener un acuerdo de largo alcance", dijo el canciller boliviano David Choquehuanca. "EEUU es un mercado importante no solamente para Bolivia, sino también para el mundo".

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Isabel Salvador, declaró al diario ecuatoriano *El Comercio* que la agenda de su país "va más allá de la ATPDEA". Salvador afirmó que se ha enviado a EEUU una propuesta "para iniciar un diálogo a largo plazo y que no sea sólo comercial. Creemos que existen otros temas sociales que son igual de importantes".

El gobierno de EEUU, no obstante, advirtió que los 10 meses de ampliación de la ATPDEA permitirán conocer si Bolivia y Ecuador han hecho progresos en cuanto al trato a los inversionistas estadounidenses.

Pero un problema que podría afectar las exportaciones de los países andinos hacia EEUU es la desaceleración de la economía estadounidense.

De hecho, entre enero y setiembre del año pasado, los países de la Comunidad Andina exportaron a EEUU sólo US\$4.4 millones, casi la mitad de los \$8.5 millones en el mismo periodo el 2006. La mayoría de las exportaciones andinas se destinan ahora a América Central, América del Sur, Europa y Asia. □

## La agenda de Ecuador "va más allá de la ATPDEA".

— María Isabel Salvador

**Noticias Aliadas**, edición impresa, ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Versión en inglés: **Latinamerica Press**.

Producido por **COMUNICACIONES ALIADAS**, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que por más de 40 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.

Directora ejecutiva: Raquel Gargatte Loarte

Directora de prensa: Elsa Chanduvi Jaña  
(echanduvi@comunicacionesaliadas.org)

Editoras: Cecilia Remón Arnáiz, Leslie Josephs

Editor gráfico: William Chico Colugna

Impresión: Ediciones Atenea E.I.R.L., Jr. Carlos Gonzales 252, Lima 32, Perú (511) 242 8263

Comunicaciones Aliadas

Jirón Olavegoya 1868, Lima 11, Perú  
(511)2659014 Fax: (511)2659186

info@comunicacionesaliadas.org

www.noticiasaliadas.org

www.latinamericapress.org (en inglés)

Además de nuestra edición impresa, ofrecemos recursos electrónicos y en línea, así como informes especiales y servicios informativos gratuitos por e-mail.

Para información de servicios y productos, contactarse con Patricia Díaz, Responsable de Mercadeo, a pdiaz@comunicacionesaliadas.org

**n** noticias aliadas

APARTADO 18-0964, LIMA 18, PERÚ

Noticias Aliadas es una asociación sin fines de lucro, con Registro Civil N° 646, Asiento A-1 (Art. 33°, D.L. 20680). Hecho el depósito legal N° 99-4052.

Printed Matter  
**IMPRESOS**